



RESOLUCIÓN No. CSJBOR20-124
16/03/2020

“Por medio de la cual se abstiene de dar trámite a una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No.: 13001-11-01-002-2020-00072

Solicitante: Omar Bitar

Despacho: Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar

Funcionario judicial: Loiwer Barragán Padilla

Proceso: Ejecutivo

Número de radicación del proceso: 132443189001-2018-00229-00

Magistrado Ponente: Iván Eduardo Latorre Gamboa

Fecha de sesión¹: 13 de marzo de 2020

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Mediante auto CSJBOAVJ20-69 de 27 de febrero de 2020, el despacho ponente requirió al señor Omar Bitar a efectos de que ampliara la solicitud de vigilancia judicial administrativa, en el sentido de que precisara los hechos u omisiones objeto de reproche que configuren mora judicial, identificación del proceso y el despacho judicial en donde cursa.

En atención a ello, a través de escrito radicado el 9 de marzo del año en curso el peticionario indicó que la sala Jurisdiccional Disciplinaria, al desatar el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar, asignó la competencia en cabeza de este último despacho para conocer del proceso ejecutivo instaurado por el quejoso en contra del Municipio de Córdoba, que corresponde al radicado No. 132443189001-2018-00229-00.

La inconformidad del peticionario radica en que el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar perdió competencia para estudiar la demanda de la referencia, dado que entre el 23 de octubre de 2018, fecha en la que dictó auto de obedécese y cúmplase, y el 14 de enero de 2020, momento en que proveyó el rechazo del mandamiento ejecutivo, trascurrieron más de dos años, por lo que esa judicatura carecía de competencia para adoptar la decisión, conforme al artículo 121 del Código General del Proceso.

Adujo, que una vez el expediente fue remitido por la Sala Disciplinaria, permaneció extraviado hasta el día 19 de diciembre de 2019, fecha en que la secretaria del despacho le indicó que por error el proceso había sido puesto en una caja que no correspondía a la de los procesos que estaban para estudio de admisión.

Por tanto, solicita se declare que la actuación surtida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar es nula de pleno derecho y, en consecuencia, se ordene la remisión del expediente al juez que le siga en turno para lo de su competencia.

II. CONSIDERACIONES

¹ Sesión celebrada por los 2 magistrados, que integran el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar. Acuerdo PSAA16-10583.

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la doctora Sara Edelmira Larios Navarro, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2. Problema administrativo

Conforme a los hechos en que se funda la solicitud, corresponde a esta corporación determinar si hay lugar a iniciar el trámite de la vigilancia judicial administrativa, y en consecuencia proceder a la verificación de lo alegado, en consonancia con lo señalado en el artículo 5° del Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011.

Para resolver la cuestión planteada, se deberá abordar el tema relacionado a continuación.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe “*para que la justicia se administre oportuna y eficazmente*” y que “*es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias*”, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos judiciales actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: “*Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones*”. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma cómo un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la sala disciplinaria seccional.

4. Caso concreto

Mediante escrito radicado el 25 de febrero del 2020, el señor Omar Bitar presentó solicitud de vigilancia judicial administrativa, no obstante al proceder a su estudio, se advirtió que no se precisaban hechos u omisiones que dieran cuenta de mora judicial, al igual que no se indicaba el radicado del proceso cuya vigilancia se perseguía, ni el juzgado en que Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

cursaba, razón por la que se le requirió mediante auto CSJBOAVJ20-69 de 27 de febrero de 2020 a efectos de que procediera de conformidad.

Dentro de la oportunidad para ello, el petente aclaró la solicitud, encaminándola a que se ejerciera vigilancia judicial administrativa sobre el proceso ejecutivo de la referencia, que cursa ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, aduciendo, en síntesis, que ese despacho judicial carecía de competencia para dictar el auto por medio del cual se rechazó de plano el mandamiento ejecutivo y por ende, solicita a esta seccional declarar que esa actuación es nula de pleno derecho y en consecuencia, se ordene la remisión del expediente al juez que le siga en turno para lo de su competencia, en atención al artículo 121 del Código General del Proceso.

Analizados los argumentos que sustentan la inconformidad presentada, se advierte que lo pretendido por el peticionario es que esta seccional vigile el trámite del proceso ejecutivo con radicado No. 132443189001-2018-00229-00, a fin de que se declare la falta de competencia del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar para proveer sobre el mismo y, en consecuencia, se disponga su remisión al juez que le sigue en turno, frente a lo cual debe advertirse que el artículo 7° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, establece que en el marco de una vigilancia judicial administrativa, *“el Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate”*.

Analizados los argumentos expuestos en la solicitud de vigilancia, se advierte que lo pretendido por el peticionario no es normalizar una situación de deficiencia de la administración de justicia con ocasión a una mora judicial actual, pues lo que realmente persigue es que esta seccional intervenga en el proceso ejecutivo de la referencia, con el ánimo de que se revise la presunta falta de competencia del juzgador en la expedición del auto que rechazó de plano el mandamiento ejecutivo, por ser a su juicio una situación constitutiva de nulidad, atribuciones que escapan de la órbita de competencia, de conformidad con las facultades descritas en los artículos 101 de la Ley 270 de 1996 y 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, a partir de los cuales se concluye que este trámite administrativo está encaminado únicamente a ejercer un control de términos sobre las actuaciones judiciales.

Además, el artículo 14 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 señala que *“en desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*.

En ese orden, no es posible cuestionar, por esta vía, el contenido de las actuaciones judiciales, los fundamentos normativos que se consideran en las providencias, inmiscuirse en los asuntos de puro derecho que se debatan o en la valoración de pruebas; de hacerlo, se pondrían en entredicho la autonomía e independencia de los jueces, garantía que también se encuentra contemplada en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y 5° de la Ley 270 de 1996. Así mismo, debe precisarse que esta corporación no tiene competencia para emitir conceptos jurídicos dentro de los asuntos que son puestos bajo su conocimiento.

Sobre el particular, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC10-53, dispuso que *“al analizarse la competencia atribuida en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996 a los Consejos Seccionales, **es claro que apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar este mecanismo para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, o para influir en el sentido de sus decisiones.** No podrán por tanto los Consejos*

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

Seccionales – Salas Administrativas - indicar o sugerir el sentido de las decisiones judiciales, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la ley y en fin nada que restrinja su independencia en ejercicio de la función judicial". (Subrayas y negrillas fuera de texto)

De conformidad con lo expuesto, en observancia a los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial, es el operador judicial quien debe valorar y decidir sobre la situación jurídica de cada proceso, sin que en ello pueda tener injerencia esta corporación.

Aunado a lo anterior, es pertinente advertir que, de existir inconformidad con el contenido de las actuaciones judiciales, las partes pueden hacer uso de los medios de impugnación que sean procedentes o ejecutar otras herramientas judiciales que realmente estén direccionados a la controversia de asuntos jurisdiccionales, así como adelantar las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos que considera contrarios a derecho, ante las autoridades correspondientes.

5. Conclusión

En consecuencia, dado que el motivo de la solicitud de vigilancia judicial administrativa no es la existencia de factores contrarios a la administración oportuna y eficaz de la justicia, entendidos como demoras injustificadas actuales, esta seccional se abstendrá de iniciar el susodicho procedimiento administrativo, y en consecuencia dispondrá su archivo.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

2. RESUELVE

PRIMERO: Abstenerse dar trámite, y en consecuencia, archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Omar Bitar, obrando en calidad de demandante en el proceso ejecutivo con radicado No. 132443189001-2018-00229-00, el cual cursa en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente resolución al peticionario y al doctor Loier Barragán Padilla, Juez Primero Promiscuo del Circuito del Carmen de Bolívar, como parte interesada.

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA
Presidente

M.P. IELG /KYBS